

The logo consists of the lowercase letters 'cem' in a white, sans-serif font, centered within a dark blue rectangular background.

CONFEDERACIÓN  
DE EMPRESARIOS  
DE MÁLAGA

## **DOSSIER DE PRENSA DIARIO**

**FECHA:** 29 DE JUNIO DE 2016

# Los constructores exigen 2.800 millones al año de obra pública en Andalucía

• Las patronales Ceacop y Fadeco denuncian la "paralización" de la Administración y los ingenieros creen que el sector seguirá "sufriendo ajustes" hasta 2018 • Reclaman que haya ya un Gobierno

Ángel Recio MÁLAGA

El freno que ha supuesto la política de austeridad de las Administraciones Públicas no le ha sentado nada bien a Andalucía. Los niveles de licitación de obra pública caen en picado desde hace cinco años y se está bastante lejos de la cantidad que sería deseable para tener un sector de construcción sano, con la correspondiente creación de empleo y generación de riqueza. Los constructores exigen a las Administraciones una inversión de 2.800 millones de euros al año para que haya una recuperación clara y asegurar 225.000 empleos, una cantidad que no es baladí en una región con un millón de desempleados. El año pasado, por ejemplo, la licitación no llegó ni a la mitad y en los cuatro primeros meses del presente ejercicio, con la incertidumbre política nacional, descendió más aún. En este contexto, los ingenieros andaluces prevén que la inversión pública no remontará, al menos, hasta 2018. Estos fueron varios de los mensajes que los expertos lanzaron ayer ante cerca de un centenar de profesionales en la jornada técnica *El Impulso de las Infraestructuras en Andalucía. Málaga como punta de lanza*, organizada en Málaga por Grupo Joly -editor de este diario- y patrocinada por Acciona.

"Estamos en un momento crucial y no podemos parar, porque seguimos sin estar en la media de inversión de otros países europeos y nos alejamos de ellos", explicó Maximiliano Muñoz, director de Zona Sur de Acciona Construcción, quien confió en que "después de las elecciones se forme gobierno y haya estabilidad".



Maximiliano Muñoz, Francisco de la Torre y Tomás Valiente, director general de Grupo Joly, ayer.

Julián Niñez, presidente de Seopan, no pudo asistir a la jornada, pero sí envió una comunicación en la que subrayaba que "España está en los puestos de cola de los 27 países de la Unión Europea por volumen de inversión pública y necesitaría con urgencia destinar entre 38.000 y 54.000 millones a infraestructuras cada año".

Muñoz destacó el impulso económico que supone la obra pública, pues de cada millón desembolsado se generan 14 empleos directos e indirectos, y subrayó que An-

dalucía "está por debajo de España en inversión hospitalaria o en educación". En su opinión, esta comunidad "tiene que rentabilizar su potente sistema portuario pues Cádiz, Algeciras y Málaga mueven la cuarta parte del tráfico nacional", a la que vez que consideró necesario hacer más infraestructuras ligadas al gas "porque Andalucía es un punto de entrada".

José Abraham Carrascosa, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, criticó que la construcción

"ha sido el pagano de la crisis, pero no el culpable" y lamentó que en los últimos años se han perdido 300.000 empleos y el 35% de empresas en este sector en la región. Culpa a la situación económica y al anterior gobierno entre PSOE e IU en la Junta de Andalucía, al que calificó de "nefasto". Carrascosa recalzó que la inversión pública prevista en España entre 2014 y 2016 era de 68.000 millones de euros, "el 28% de Francia o el 33% de Alemania, pero no vamos a llegar ni a la mitad". El decano de los ingenie-

ros vaticinó que el sector "va a seguir sufriendo ajustes hasta 2018" y marcó como objetivo para 2023 que se destine un 3,3% del PIB nacional para resurgir. Carrascosa aseguró que desembolsando 65.000 millones de euros se genera un millón de empleos en la legislación y, además, revierte al Gobierno 40.000 millones por impuestos, consumo, etcétera.

Pero una cosa son los presupuestos y otra la vida real. Emilio Corbacho, vicepresidente de Fadeco, denunció que "los presupuestos no se cumplen, son una mentira continuada, un telón de fondo para sacar pecho y luego se repiten capítulos de años anteriores porque las Administraciones están absolutamente paradas y van a lo suyo", a la vez que comentó que "Andalucía no tiene una lista de obras para el plan Juncker" de fondos europeos.

Francisco Fernández, presidente de la patronal Ceacop, fue en la misma dirección. "La obra pública ha pagado las consecuencias de la crisis y la austeridad con uno de cada dos parados y ya no admite más prórrogas", dijo, mientras afirmaba que "hemos perdido a nuestro principal cliente: la Administración". Fernández lanzó un listado de obras importantes por hacer: ampliación del hospital Reina Sofía en Córdoba, la ciudad sanitaria de Jaén, las ciudades de la Justicia de Huelva y Jaén, varias carreteras en Sevilla, el Metro... Otra asignatura pendiente, según el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre es "sacarle más partido al aeropuerto de Málaga conectándolo con el AVE, algo de lo que hemos hablado en las reuniones con Sevilla, Córdoba y Granada".

## LAS FRASES



**MAXIMILIANO MUÑOZ**  
Director Zona Sur de Acciona

"Estamos en un momento crucial y no podemos parar, porque nos alejamos de otros países europeos"



**FRANCISCO F. FERNÁNDEZ**  
Presidente de Ceacop

"La Administración es nuestro principal cliente y la hemos perdido. La obra pública no admite más prórrogas"



**JOSÉ A. CARRASCOSA**  
Decano Col. Ingenieros Caminos

"La construcción ha sido el pagano de la crisis, pero no la culpable. El Gobierno de PSOE e IU en la Junta fue nefasto"



**EMILIO CORBACHO**  
Vicepresidente Fadeco Contratistas

"Los presupuestos no se cumplen. Son una mentira continuada porque la Administración está parada"



**FRANCISCO DE LA TORRE**  
Alcalde de Málaga

"Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada hemos hablado para la llegada del AVE al aeropuerto de Málaga"

A. Recio MÁLAGA

Málaga ha vivido grandes años en materia de infraestructuras tras la llegada del AVE, la ampliación del aeropuerto, la puesta en marcha de la hiperronda o la remodelación para uso ciudadano del puerto. Pero eso ya es historia. Málaga tiene que seguir adelante para prosperar, máxime cuando es una de las provincias españolas con mayor saldo migratorio, y la lista de cosas por hacer es aún larga. El tren litoral hasta Marbella y Estopona, el acceso norte al aeropuerto, la ampliación del cercanías hasta el PTA, el saneamiento integral, nn carril bus-VAO desde Málaga a Torremolinos, el soterramiento de la línea ferroviaria en el puerto, el bypass en Almodóvar del Río para acortar el trayecto en AVE entre Málaga y Sevilla, eliminar el riesgo de inundabilidad en el Gnadalhorce, integrar de alguna manera el Guadal-

Expertos piden más coherencia a la Administración al conceder los proyectos

medina... Muchos proyectos en el aire y poco dinero en las arcas de la administración local, regional y nacional. Los profesionales de la construcción, entre sus múltiples tareas, reivindicaron ayer otro salto de calidad y denunciaron la escasez actual.

"Málaga ha tenido una inversión de 7.500 millones de euros en la década pasada pero ahora solo hay 243 millones de euros en los presupuestos. Hemos pasado de una inversión pública de 700 euros por persona a 150 euros por persona en Málaga", subrayó Francisco López, gerente de proyectos de la zona Sur de Acciona, quien remarcó que "hay problemas de falta de entendimiento entre las Administraciones para tramitar permisos, licitaciones y autorizaciones".

Emilio López, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, recordó la

● Expertos destacan que, pese al tirón de esta provincia, es fundamental el tren litoral a Marbella o el acceso norte al aeropuerto

## Una amplia lista de infraestructuras por hacer en Málaga



Un momento de la Jornada profesional celebrada ayer en el hotel Málaga Palacio.

"transformación integral" de la provincia de Málaga en los últimos 25 años, pero hizo hincapié en la amplia agenda de infraestructuras pendientes y en la necesidad "de mejora e inversión de las que ya tenemos".

A lo largo de la jornada *El impulso de las infraestructuras en Andalucía. Málaga como punta de lanza*, que se celebró ayer en el hotel Málaga Palacio, se debatió en varias ocasiones sobre las adjudicaciones a la baja que hacen las Administraciones a las empresas y sobre la

morosidad. En el primer aspecto, los expertos aseguraron que hay empresas que se presentan a los concursos con presupuestos hasta un 50% inferiores a la licitación a sabiendas de que, si resultan adjudicatarios, harán modificaciones para elevar el importe final. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Francisco Fernández, destacó que "nosotros [las empresas] nos cavamos nuestra fosa con las bajas en la licitación", pero apuntó

que es la ley del mercado. José Carrascosa, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, añadió que la culpa es de los dos: de la empresa por presentar licitaciones tan mermaadas pese a saber que no les va a llegar y de la Administración por seleccionarla, "porque al final es la que paga y sabe lo que está contratando". El presidente de los constructores malagueños, Emilio López, explicó que lo ideal es que se planifiquen "a costes realistas" la licitación y la explotación y "si es

correcto no debe haber grandes bajas". No obstante, exigió a la Administración que sea "coherente" a la hora de conceder las obras y que no se aprovechen de la necesidad de los contratistas "porque han llegado a pedir a una empresa que optaba a construir un centro de salud una ambulancia con la marca y el modelo incluido". "La licitación no puede convertirse en la carta a los Reyes Magos de la Administración", resultó. Sobre la morosidad, López denunció que "hay administraciones que han decidido volver a las andadas y no pagan en plazo".

Ante la falta de inversión, sonó a música celestial el plan de inversiones de la Universidad de Málaga para los próximos cuatro años, que la vicerrectora de Smart-Campus de la UMA, Raquel Barco, cifró en 130 millones de euros. Incluirá nuevos edificios en Teatinos para las facultades de Turismo, Psicología o el pabellón de gobierno; viviendas, colegios mayores y residencias para estudiantes; y un gran bulevar de tres kilómetros que será un gran parque con una inversión de 20 millones de euros. "Queremos crear zonas verdes que sirvan de lugar de encuentro de la comunidad universitaria y de los ciudadanos", dijo.

Otro experto que habló de inversiones fue Andrés Gutiérrez, director del área de Fomento e Infraestructuras de la Diputación, quien comentó que en 2016 hay un presupuesto de nueve millones de euros para la red provincial de carreteras. Además de mejorar su seguridad se harán miradores.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abogó por "sacar partido" a las infraestructuras existentes con una menor inversión y puso sobre la mesa su intención del Metrobus al Civil o la posibilidad de extender la red de recarga de vehículos eléctricos. De la Torre recordó el gran cambio de Málaga en 30 años, como también resaltó el edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares. "La estrategia de Málaga es hacer planes a 15 años, el sueño es realizable y por eso se invierte tanto aquí, por lo que tenemos que dejar trabajar a los profesionales", comentó el concejal.



**EMILIO LÓPEZ**  
Presidente ACP Málaga

"La licitación no puede convertirse en la carta a los Reyes Magos de la Administración"



**FRANCISCO LÓPEZ**  
Gerente Proyectos Sur Acciona

"Hay falta de entendimiento entre las Administraciones para tramitar permisos, licitaciones y autorizaciones"



**RAQUEL BARCO**  
Vicerrectora Smart-Campus UMA

"La universidad va a invertir 130 millones de euros en los próximos cuatro años en Teatinos"



**FRANCISCO POMARES**  
Concejal Ordenación Territorio

"La estrategia de Málaga es hacer planes a 15 años. Hay que seguir soñando y dejar trabajar a los profesionales"



**ANORÉS GUTIÉRREZ**  
Dtor. Infraestructuras Diputación

"Hay nueve millones de euros en 2016 para mejoras en la red provincial de carreteras"

# Constructores recurren el plan de obra en los distritos por sus altos requisitos

► Crean «desproporcionadas» las exigencias de solvencia a las pymes que se recogen en el pliego

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA  
 @josevirodriguez

■ La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) anunció ayer que ha interpuesto un recurso administrativo al pliego de base elaborado por el Ayuntamiento de Málaga para su nuevo modelo de contratación de pequeñas obras en los distritos, al entender que las exigencias de requisitos de solvencia para las firmas que quieren optar a trabajar en todas las zonas son «totalmente desproporcionadas» y dejarían a las pequeñas empresas «fuera de la licitación».

Según explicaron fuentes municipales, la situación se ha generado por un problema de interpretación de las condiciones del pliego, que establece 12 lotes de actuaciones para 2016 y 2017 a los que optar donde se incluyen a los distintos distritos y al área de servicios operativos. Algunas empresas han presentado ofertas a los 12 lotes para aumentar sus posibilidades de ser elegidos para alguno de ellos, a pesar de que el pliego estipula que sólo pueden ser preseleccionados para un máximo de tres. Cada lote exige la acreditación de una determinada solvencia económica y técnica que se mide en términos de volumen de negocio. El caso es que estos ofertantes entendían que la licitación sólo les exigía la solvencia referida a cada lote de forma individual. Sin embargo, en virtud del pliego, parece que el criterio de la mesa que estudiará las ofertas pasa por requerir las exigencias resultantes de la suma de todos los lotes a los que de entrada optan.

Para la ACP, la consecuencia es que muchas firmas, en su mayoría pequeños negocios locales, quedarán excluidas del proceso, ya que la acumulación de lotes dispara el parámetro de solvencia muy por encima de su volumen de actividad real como empresas. Desde el Ayuntamiento, un portavoz municipal recordó ayer que la



Una obra en un distrito de Málaga, en una imagen de archivo. ARCA/INEGA

elaboración del pliego fue consensuada en su momento con la ACP, aunque señaló que la controversia será estudiada hoy «para tratar de encontrar una solución». Un total de 87 empresas han presentado sus ofertas al convenio marco y, en principio, los plazos dictan que la mesa tendría que abrir los sobres mañana jueves, 30 de junio, para iniciar su estudio.

La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, afirmó que en las últimas semanas han sondeado a casi 40 firmas presentadas, y cerca de tres cuartas partes admitía que han optado a los 12 lotes por entender que la solvencia exigida para cada uno no era acumulativa. Aragón entiende que «la única solución que cabe es parar la licitación, determinar una solvencia adecuada al tipo de actuación a realizar y por supuesto, informar de ella de forma clara en el pliego o en el perfil del contratante, para que todas las empresas estén en una situación de igualdad y no se vulnere la competencia». En caso contrario, la ACP prevé que los adjudic

catarios «no serán las pymes malagueñas, que tienen capacidad y solvencia sobradamente demostrada para ejecutar estas actuaciones». El recurso, presentado la semana pasada, está basado en que «la clasificación exigida a las empresas que quisieran optar a todos los distritos, a pesar de que sólo pudieran ser preseleccionados como mucho para tres, son totalmente desproporcionadas».

## Requisitos excesivos

«Se está solicitando que las empresas demuestren su solvencia para ejecutar obra de importe superior a los 7,2 millones de euros, cuando en la práctica se trata de micro actuaciones que no superan los 50.000 euros y que necesariamente estarán por debajo de los 433.563 euros que tiene asignado el distrito con mayor volumen de obra previsto», indicó Aragón. La ACP señala, a modo de ejemplo, que la clasificación exigida sólo la tienen en Málaga 10 empresas.

«La transparencia, la seguridad jurídica y el apoyo a las empresas

**Convenio marco**

El concurso tiene un valor total de 4,5 millones de euros para la realización de obras en los distritos en 2016 y 2017. Se establecen doce lotes, uno para cada distrito y el último para los Servicios Operativos. Cada uno tiene asignada la cantidad que podrá ejecutar, a una media de 350.000 euros por distrito.

malagueñas fueron los criterios que movieron al Ayuntamiento a cambiar el modelo de contratación. Hasta ahora, al ser obras que generalmente no sobrepasan los 50.000 euros, era la adjudicación directa. Este año, con el objetivo de que la licitación fuera más abierta se ha puesto en marcha un nuevo modelo donde se preseleccionaría a tres empresas por distrito, que serán las que tendrían opción real de ejecutar las actuaciones cuando vayan surgiendo. Para que la actividad llegara al mayor número, se estableció además la limitación de que una misma firma no pueda ser preseleccionada para más de tres distritos», apuntó la ACP.

«Todas estas buenas intenciones se han visto truncadas cuando se ha publicado el pliego de licitación. Sus imprecisiones y errores jurídicos han derivado en desigualdades entre las empresas licitadoras, que han entendido requisitos diferentes», añadió. Por un lado, las que entendieron que había que justificar la solvencia por el importe de obra de cada uno de los distritos de forma independiente y, por otro, las que entendieron que era la que se derivaba de sumar los importes de todos los distritos. «Esta última, parece ser la mantenida por la mesa de contratación, a pesar de que su ponga una sobrevaloración de los requerimientos realmente necesarios», lamentó la ACP.

## Lanzadera de empleo de la Fundación Santa María la Real y Telefónica

► Un total de 25 desempleados reforzarán habilidades y mejorarán sus posibilidades laborales

### LA OPINIÓN MÁLAGA

■ La Fundación Telefónica, la Fundación Santa María la Real y la Junta de Andalucía han puesto en marcha una lanzadera de empleo en Málaga en la que se fomentará la inserción laboral de 25 desempleados. Estas personas entrenarán en la próxima semana «una nueva búsqueda de trabajo en equipo para reforzar sus habilidades, aumentar su empleabilidad y contar con más posibilidades de encontrar trabajos».

La lanzadera de Málaga, que cuenta con la colaboración del IMFE y la cofinanciación del Fondo Social Europeo, figura entre las siete primeras abiertas en la región junto a las de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera y Sevilla, que acogerán a un total de 175 personas desempleadas. Cada lanzadera está integrada por 25 personas, hombres y mujeres, de entre 18 y 52 años. En todos los equipos, los participantes tienen diferentes perfiles formativos y diferentes experiencias laborales.

Durante los próximos cinco meses, los participantes se reunirán varios días a la semana para entrenar «una nueva búsqueda de trabajo, colectiva y solidaria». Llevarán a cabo diversas actividades: sesiones de *coaching* e inteligencia emocional, dinámicas de comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0; entrenamiento de entrevistas; elaboración de mapas de empleabilidad, visitas a empresas, reuniones con emprendedores y procesos de intermediación laboral con responsables de RRHH. Está previsto abrir próximamente otras tres lanzaderas en Marbella, Almería y Mairena del Aljarafe, incluidas en las 60 que este año se impulsarán en Andalucía.

# El brexit lanza a los británicos de la Costa a la búsqueda de la nacionalidad

► La ruptura de Reino Unido con Europa suscita una avalancha de consultas en la provincia sobre las exigencias para obtener el pasaporte español ► Preocupación en el mercado inmobiliario por la caída de la libra, que ralentiza la compra de viviendas

L. MARTÍN MÁLAGA  
@opiniondemalaga

■ Ha pasado menos de una semana. Un periodo, en general, y con permiso de España y de sus elecciones, demasiado breve, aunque lo suficientemente amplio, dadas las repercusiones económicas de la decisión, para que empiecen a advertirse, y con contundencia, las primeras consecuencias. Las bolsas no esperan y la convulsión del brexit, que ha arrastrado a Gran Bretaña hacia una tormenta perfecta, ha encendido la mecha, provocando un efecto en cascada que ya se desliza hacia zonas aparentemente remotas, pero con muchos lazos financieros con las islas como la provincia de Málaga.

En la Costa del Sol, el trauma de la propuesta de salida de la Unión Europea, junto con su influencia directa en la libra, ha tardado muy poco en traslucirse. Además, con dos movimientos que afectan a las relaciones que definen el vínculo comercial con Reino Unido: el turismo y el mercado inmobiliario, principalmente. Ambos, con los mismos protagonistas e idéntica motivación, la incertidumbre, que ha hecho que muchos británicos se replanteen sus inversiones en el exterior e, incluso, se lancen a estudiar alternativas para seguir conservando la ciudadanía europea.

Sobre este último respecto, la fuerza de la demanda no ofrece ningún tipo de duda; lo señala Ricardo Bocanegra, presidente de la Federación de Asociaciones de Extranjeros de la Costa del Sol. Mientras en las islas se hace acto de contrición, sus súbditos en Málaga llenan de consultas los despachos de abogados y los ayuntamientos. Su interés, hasta ahora impensable, o cuanto menos no urgente, saber de primera mano qué requisitos han de cumplir para obtener la nacionalidad española.

La avalancha, anota el especialista, está justificada. El abandono unilateral de la Unión Europea deja en el aire algunos de los derechos básicos que protegen a los turistas en sus estancias en el extranjero; entre ellos, las prestaciones sanitarias, que pasarían de una cobertura casi integral a estar a expensas del estatuto posterior que se negocie con España y con el concierto comunitario. De momento, todos son interrogantes. No hay ninguna garantía —en realidad nunca la hubo— de que la salida desemboque en el ingreso del país en algunas de las organiza-



Un grupo de turistas descansa junto a la entrada de la Catedral de Málaga. ARCA/MEGA

ciones periféricas del proyecto continental como el Espacio Económico Europeo, lo que significa que, como mínimo, el acceso a los servicios públicos en España quedará modificado. Y ese es un riesgo que preocupa, y mucho, a una población, los residentes, que en su mayoría roza ya la edad avanzada.

La motivación de los británicos viene también por las trabas que supondría para su circulación el perder la condición comunitaria. El proceso, en cualquier caso, no es sencillo. Y en la Costa del Sol se multiplican en estos días las respuestas: los británicos que quieren conseguir la nacionalidad están obligados a someterse a unos

trámites que incluyen tanto la certificación de la residencia como el dominio del idioma y de la cultura española. «Por ahora la avalancha se ha dado más entre los que hablan español, pero no es de extrañar que se sumen el resto», reseña.

A la preocupación de los residentes, se une también otro efecto inmediato con influencia en los intereses económicos del conjunto de la costa: la ralentización de la compra de viviendas, que, de acuerdo con Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, se prolongará en la medida que continúe la devaluación de la libra.



## Mercado crucial

Los británicos son los turistas extranjeros que más viviendas compran en la provincia. Acumulan una de cada cinco adquisiciones

En este caso, las matemáticas tan poco engañan. La debilidad de la moneda, y su actualmente desventajosa relación con el euro, pone en riesgo la capacidad de inversión de los turistas. Y eso no es ningún detalle menor para una provincia, la malagueña, que como sostiene la especialista, apoya el 40 por ciento de sus ventas en el mercado extranjero, con un protagonismo muy claro de los británicos, que adquieren alrededor del 20 por cien de las casas de la Costa del Sol que se venden a ciudadanos de otros países. «Esperemos que se establezca, porque si no lo notaremos mucho», puntualiza.

## La Junta se previene contra la amenaza económica

Andalucía creará un grupo de trabajo para adelantarse a los efectos del brexit y proteger los intereses regionales

L. M. MÁLAGA

■ La Junta de Andalucía se parapeta contra el brexit. El Gobierno andaluz quiere adelantarse a los posibles efectos económicos de la controvertida salida del Reino Unido de la Unión Europea, y, para ello, aprobó ayer formalmente la creación de un grupo de

trabajo y análisis que partirá con una misión clara: evaluar la posible incidencia del proceso en la región y poner medidas en marcha con el objetivo de suavizar cualquier tipo de impacto.

Según informó la administración autonómica en un comunicado, el cambio de estatus de Gran Bretaña exige que haya que estar pendientes de los intereses andaluces y «no perder ni un minuto» en procurar elementos que amortigüen eventuales daños. El grupo de trabajo tendrá una estructura interdisciplinaria de la que formarán parte los consejeros de

Economía y Conocimiento; Empleo, Empresa y Comercio; Turismo y Deporte, y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, además del vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, que se ocupará de coordinar el proyecto.

Aunque la iniciativa se enfoca principalmente al apartado económico, la Junta asegura que también estará muy presente de la situación de Gibraltar y de los andaluces que viven en el Reino Unido. De acuerdo con el Gobierno andaluz, los efectos del brexit serán especialmente notorios en ámbitos decisivos para

Andalucía, como la configuración de los fondos europeos, la Política Agraria Común, las previsibles tensiones financieras, el encarecimiento de las exportaciones por la depreciación de la libra o la alteración de las relaciones jurídicas entre ciudadanos, asunto este que afecta particularmente a la numerosa colonia británica residente en la comunidad —unos 80.000— y a los más de 8.800 andaluces en Reino Unido. La región, además, tiene desde hace años una pródiga relación comercial que implica la venta a las islas de abundantes materias primas.

# La ampliación comercial de Plaza Mayor supera los reparos de la Junta y Aviación Civil



JESÚS HINOJOSA

jhinojosa@diariosur.es

La promotora obtiene el visto bueno de Medio Ambiente a cambio de acometer obras para reducir el riesgo de inundación en la zona

**MÁLAGA.** Aunque todo parecía haberse puesto en contra del desarrollo de una de las iniciativas comerciales más destacadas de las previstas en los últimos años para Málaga, finalmente el camino se despeja para que pueda hacerse realidad la ampliación comercial del centro Plaza Mayor. Tras más de un año de trámites, el proyecto para construir un 'outlet' de marcas de lujo en la zona oriental de este complejo de ocio, lo que implicaría una inversión de 115 millones de euros y la creación de cientos de puestos de trabajo, ha logrado salvar los reparos puestos por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento. Han sido necesarias numerosas reuniones con los responsables de ambas administraciones y la elaboración de varios estudios técnicos para que los promotores de esta actuación, la compañía Sonae Sierra en alianza con el grupo británico McArthurGlen, líder europeo en 'outlets' de lujo, hayan logrado salvar los obstáculos que hasta ahora impedían su realización.

Uno de los más complicados de superar era el reparo de Medio Ambiente por ubicarse el proyecto dentro del ámbito marcado por el riesgo de inun-



dación del entorno del Guadalquivir. Finalmente, la consejería anunció ayer que su informe para este expediente era favorable aunque, eso sí, condicionado a que los promotores efectúen y costeen una serie de medidas correctoras para paliar el riesgo de inundación en estos suelos, que abarcan una superficie de unos 23.000 metros cuadrados. Este periódico intentó sin éxito que desde Medio Ambiente se concretaran cuáles son esas medidas. No obstante, pudo conocer que las negociadas por la promotora con los responsables de la Dirección General de Dominio Público-Hidráulico pasan por la elevación del terre-

no sobre el que se construirá este centro comercial, por encima de la cota de inundabilidad del Guadalquivir, y por ejecutar una ampliación del canal de desagüe del aeropuerto, del que los propietarios de Plaza Mayor ya ejecutaron la mitad. En total, más de dos millones de euros en obras que los impulsores de este proyecto están dispuestos a asumir con tal de poder llevarlo a buen término.

Es lo que algunos responsables municipales han bautizado ya como la 'factura del agua' que hay que abonar con tal de recabar el visto bueno del Gobierno andaluz a proyectos en zonas declaradas inundables, desde la

## La continuación del expediente depende ahora de una evaluación ambiental que podría salvarse próximamente

aprobación de los planes hidrológicos y de gestión del riesgo de inundaciones a principios de este año. Otro de los que ya ha aceptado abonar esa 'factura' es el propio Ayuntamiento de la capital, que ha asumido duplicar el encauzamiento del arroyo del Cañuelo, valorado en un millón de

euros, para poder obtener la aprobación de la Junta al plan urbanístico para convertir los suelos del antiguo campamento Benítez en un parque. Este encauzamiento también beneficia a los promotores de la ampliación de Plaza Mayor a la hora de salvar los reparos de Medio Ambiente y que puedan seguir la tramitación para encajar el proyecto mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Por este trámite, el Ayuntamiento ingresará 4,7 millones de euros, según lo estipulado en el convenio urbanístico asociado a esta operación.

## Sin acabados metálicos

También la Dirección General de Aviación Civil ha emitido recientemente un informe positivo a la ampliación comercial de Plaza Mayor, supeditado, eso sí, a que el expediente de modificación del PGOU recoja una serie de requisitos para respetar las servidumbres del aeropuerto, antes de que reciba la aprobación definitiva. Entre ellos, que las fachadas de las nuevas edificaciones eviten los acabados metálicos para que no afecten a los campos radioeléctricos de los dispositivos que facilitan las operaciones de vuelo.

Una vez superados los reparos de Medio Ambiente y de Aviación Civil, la ampliación comercial de Plaza Mayor ya solo tiene que salvar un procedimiento denominado de 'evaluación ambiental estratégica simplificada' y exigido igualmente por la Junta que, según fuentes consultadas, no tendría mayores complicaciones y podría culminarse en las próximas semanas.

A partir de ese momento, la modificación del PGOU podría ser aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento para su remisión al Gobierno andaluz, que tiene la última palabra para el visto bueno definitivo.

## El Gobierno andaluz abre la puerta a analizar la solución para cada uno de los proyectos afectados por la inundabilidad

:: J. HINOJOSA

**MÁLAGA.** La Consejería de Medio Ambiente emitió ayer un comunicado respecto al informe favorable a la ampliación comercial de Plaza Mayor en el que hizo ver que el procedimiento seguido para desbloquear este proyecto puede repetirse en otros casos de actuaciones afectadas por los mapas del riesgo de inundación en el entorno del Guadalquivir. Así, desde este departamento de la Administración regional se considera que es «perfectamente viable, con soluciones adaptadas a cada caso concreto, salvar la afectación de la zona inundable en Málaga hasta que se pueda ejecutar lo que sería la solución definitiva y general, que es la

ampliación de capacidad del encauzamiento del río Guadalquivir», mediante la sustitución del actual puente de la Azucarera y la supresión de los restos del antiguo puente del ferrocarril, lo que disminuye la capacidad del encauzamiento de la desembocadura para avenidas de un periodo de retorno de 500 años. La consejería recuerda que ambas actuaciones deben ser ejecutadas por el Gobierno, por lo que su realización depende actualmente de que se defina un nuevo Ejecutivo central tras las elecciones del pasado domingo.

De este modo, Medio Ambiente abre la puerta a analizar cada uno de los proyectos afectados por la inundabilidad y supedita su posible desa-

rollo a que se realicen medidas correctoras que disminuyan los riesgos de inundación y que, eso sí, tendrían que ser asumidas por los promotores de esos proyectos. «Es así como las actuaciones concretas podrán desarrollarse incluso en la zona inundable, con correcciones aplicables al caso. Gracias también, entre otras cuestiones, a la colaboración entre administraciones y el tejido socioeconómico», precisa la nota.

Uno de los proyectos afectados por la inundabilidad, que incluso menciona el comunicado de Medio Ambiente, es la ciudad aeroportuaria propuesta por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. La huella de la inundabilidad obligaría a recortar sus te-

rrenos en un 40%. El alcalde de esta localidad, Joaquín Villanova, aseguró que va a seguir exigiendo a la Junta que tome medidas para evitar la afectación a este proyecto. «Ya le propusimos elevar la cota del terreno, como han aceptado ahora para la ampliación de Plaza Mayor, pero lo rechazaron con el argumento de que también habría que subirla en la otra

## Alhaurín de la Torre exige que se evite el recorte de suelo a la ciudad aeroportuaria

orilla del río, la de los polígonos», expuso. «Hay que adoptar una solución integral. Es una vergüenza que privados tengan que pagar obras para reducir el riesgo de inundación que son actuaciones de interés público», dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, opinó que esta postura de la Junta puede beneficiar a proyectos de una gran superficie, y cuyos promotores estén dispuestos a asumir el coste de las medidas correctoras con tal de poder desarrollarlos. «¿Pero qué pasa con el suelo urbano consolidado de los polígonos? ¿Qué medidas va a poder pagar el empresario que quiere construir una nave? Por eso le pedimos a la Junta una moratoria de cinco o seis años y que no impidan el desarrollo de proyectos en suelos consolidados hasta que se ejecuten las medidas correctoras genéricas que beneficien a todo el entorno del Guadalquivir, como el nuevo puente», argumentó.



Recreación del proyecto para Hoyo de Esparteros. :: SUR

## El promotor del hotel de Moneo gana tiempo para sacar adelante el proyecto

La autoridad que gestiona la financiación europea a la que aspira Braser amplía el plazo para concederla hasta finales de julio

:: J. HINOJOSA

MÁLAGA. El promotor del proyecto urbanístico para Hoyo de Esparteros, que incluye un hotel diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, tiene más opciones de poder llevar finalmente a cabo esta actuación, para la que prevé contar con financiación facilitada desde Ged Capital, entidad que gestiona los préstamos y participaciones de capital soportadas por los fondos europeos denominados Jersica en Andalucía. Según la normativa para poder optar a esta financiación, la empresa Braser, que está detrás de esta controvertida actuación, debería contar con todos los permisos para poder desarrollar las obras y recibir estos fondos mañana jueves día 30 de junio.

En esta premura de plazos ha justificado el equipo de gobierno municipal la reactivación en mayo de los trámites para otorgar los permisos de los que aún carece el proyecto, esto es, la aprobación del plan de urbanización, pendiente de la resolución de las alegaciones que ha recabado, y la licencia de obras, a la espera de sendos informes de las consejerías de Cultura y Turismo. Sin

embargo, la promotora ha ganado tiempo para poder solventar ambas cuestiones al haber ampliado la autoridad que gestiona los fondos Jersica el plazo para otorgarlos al próximo 31 de julio, lo que implica que Braser gana un mes más para poder obtener los permisos municipales que le faltan. Así lo confirman a este periódico fuentes de Ged Capital consultadas por este periódico, que aclararon que esta ampliación del plazo estipulado inicialmente por la autoridad que dirige estos fondos se ha aplicado a todos los proyectos que aspiran a ellos, no solo a este de Málaga

### Un mes más

De este modo, Braser tiene 30 días por delante para optar a los permisos municipales que le faltan para poder acometer las obras del proyecto de Hoyo de Esparteros, al que se opone una corriente ciudadana porque implica la demolición y reconstrucción de la fachada del edificio que albergó la pensión La Mundial, y por la altura del hotel diseñado por Moneo, avalada por una modificación del planeamiento urbanístico del Centro Histórico.

No obstante, la postura contraria a este proyecto de los grupos de la oposición podría tumbarlo en el consejo rector de Urbanismo en el que se votará el plan de urbanización de la zona. Solo una posible abstención del grupo de Ciudadanos, que los ediles de la formación naranja no descartan, podría salvarlo.

# El Ayuntamiento admite que una Limasa municipal costaría 7,8 millones menos

► De la Torre entrega al comité el primer estudio realizado por el Consistorio sobre la municipalización ► El coste de Limasa en 2016 alcanzará los 101 millones de euros, muy por encima de los 89 presupuestados

LA OPINIÓN MÁLAGA  
► @opiniondemálaga

■ Por primera vez desde que se iniciara la batalla política por la municipalización o la privatización de Limasa, el gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha reconocido que con una Limasa municipal se produciría un ahorro neto importante y lo ha cuantificado en 7,8 millones de euros (7.861.685).

Los datos pormenorizados en el cuadro adjunto le fueron presentados por el alcalde, Francisco de la Torre, a los miembros del comité en la reunión del pasado lunes.

Según esos datos, que toman como referencia el presupuesto previsto para este ejercicio de 2016, el coste previsto de la empresa será de 91,8 millones de euros, a lo que se añaden los 9,1 millones del 10% del IVA, que hace un presupuesto total de 101 millones de euros.

## Desglose

Los 9,1 millones que Limasa deberá pagar este año del 10% de IVA se reducirían a un máximo de 4,3 millones del mismo impuesto si la empresa fuera municipal. Eso supondría un primer ahorro de 4,7 millones (4.795.056). A ello se sumarían los 6,2 millones que la empresa se ahorraría por beneficio industrial, asistencia técnica, gastos generales y gastos financieros, más otros 934.002 euros de otros restos, lo que sumaría un total de 11.992.879 euros. A ello habría que restarle finalmente una devolución de Hacienda de 4,1 millones que no tendría lugar si la empresa fuese pública, con lo que se llega a la cifra final que, según el Ayuntamiento, podría ahorrar este año Limasa si fuese municipal que es de 7.861.685 euros.

Del desglose de las cuentas destaca, además de los 70,4 millones de gastos de personal, los 7,6 millones en gastos de amortización.

## Las cuentas de Limasa para 2016

LA DOS PRIMERAS COLUMNAS FIJAN LOS GASTOS MÁS EL IVA Y LA TERCERA LO QUE SE PAGARÍA DE IVA SI FUERE MUNICIPAL

	Situación Previsto 2016	Efecto IVA 10%	Efecto IVA 21%
MANO DE OBRA	64.000.000,00	6400000,00	
COMBUSTIBLE	2.350.000,00	235000,00	493500,00
REPUESTOS Y OTROS CONSUMIBLES	4.200.000,00	420000,00	882000,00
AMORTIZACIONES	6.938.475,35	693847,54	1457079,82
ARRENDAMIENTOS	2.700.000,00	270000,00	567000,00
REPARACION Y CONSERVACIÓN	1.600.000,00	160000,00	336000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	400.000,00	40000,00	84000,00
SEGUROS	825.000,00	82500,00	173250,00
PUBLICIDAD	275.000,00	27500,00	57750,00
SUMINISTROS	325.000,00	32500,00	68250,00
REVERSIÓN CAPITAL PRIVADO	191.572,57	19157,26	
OTROS SERVICIOS	1.300.000,00	130000,00	273000,00
TRIBUTOS	200.000,00	20000,00	
GASTO FINANCIERO	300.000,00	30000,00	
TOTAL CONCEPTO PRODUCCIÓN	85.305.047,92	8530504,79	
Beneficio Industrial 20%	1.706.100,96	170610,10	
Asistencia técnica 2,5%	2.132.626,20	213262,62	
Gastos generales 0,85%	725.092,91	72509,29	
Gastos financieros % según servicio	1.700.000,00	170000,00	
<b>COSTE PREVISTO DE LA EMPRESA</b>	<b>91.868.867,99</b>	<b>9.186.886,80</b>	<b>4.391.829,82</b>

## La oposición: «De la Torre ya ha decidido privatizar»

► Los tres grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital, PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente, han vuelto a acusar al alcalde, Francisco de la Torre (PP), de «mentir» en relación con el futuro de Limasa, considerando que ya tiene decidida la privatización del servicio de limpieza. En este punto, criticaron ayer que el regidor no se haya reunido aún con ellos cuando, sin embargo, la fecha límite para decidir el futuro modelo es mediados de julio.

Así lo expresaron Begoña Medina (PSOE), Juan José Espinosa (Málaga Ahora) y Remedios Ramos (Málaga para la Gente), que criticaron que «con la oposición ni una palabra», en palabras de Espinosa. A su juicio, «es muy acertado que se reúna con los trabajadores, pero no que no lo haga con la oposición».

porque la decisión afecta a la ciudad, al erario público. Al alcalde se le olvida que ya uo tiene mayoría absoluta», por ello «no vamos a parar hasta que nos escuche y se reúna con nosotros».

En la misma línea se pronunció la socialista Begoña Medina, que hizo hincapié en que el «objetivo» de De la Torre no es otro que «privatizar Limasa». Por contra, la municipalización de Limasa permitiría «un ahorro, una mejor gestión y una mayor transparencia», por lo que «nos jugamos mucho».

Para Remedios Ramos, de Málaga para la Gente, la situación es «esperpéntica, engañando a los trabajadores y no reuniéndose con los grupos municipales». «El alcalde miente, miente y miente en un tema tan serio como es este servicio básico», concluyó.

Las cifras del Ayuntamiento sobre el previsible ahorro de una Limasa municipal difieren escasamente de las del comité de empresa, que cifró el ahorro en 8,5 millones, ya que le añade a ese capital de ahorros, los 200.000 euros que se pagan de tributos, los 300.000 de gastos financieros y los 191.572 de reversión al capital privado.

## Antigüedad y nocturnidad

Más allá de las cuentas, en la reunión del lunes el alcalde se comprometió ante los representantes de los trabajadores a que «si vosotros aceptáis nuestras condiciones, yo voy a defender la municipalización de Limasa», según el propio De la Torre corroboró ayer al hacer balance de la cita.

Frente a la propuesta del comité de renunciar a su convenio y acogerse «sin condiciones» al del personal laboral del Ayuntamiento, tal como en un principio les pidió el equipo de gobierno, el alcalde ha depurado aún más sus exigencias y de entrada rechaza que la plantilla de Limasa se integre en el convenio del Ayuntamiento. Por el contrario, reclama que la plantilla mantenga su convenio, pero adaptado a las nuevas exigencias. Estas pasan por una rebaja salarial de un 20% igual para todas las categorías; jornada de 37,5 horas y acceso al puesto de trabajo por concurso. Estas serían las exigencias básicas. A partir de ahí De la Torre exige a la plantilla otras renuncias como cobrar la antigüedad al precio que fija el convenio del Ayuntamiento, que es un 50% más bajo que el de Limasa; por contra la nocturnidad se abonaría al precio actual de Limasa y no conforme al plus de nocturnidad del Ayuntamiento, que es más alto. También les exige renunciar a las ayudas sociales del acuerdo laboral municipal.

A cambio se establecería, como compensación, una tabla de productividad que permita a los trabajadores reducir la bajada salarial.

Los representantes de la plantilla, por su parte, señalan que están dispuestos a sacrificios, «pero siempre que lo que se nos pida sea justo», indicó su presidente, Manuel Belmonte, por lo que mantienen su oferta de acogerse al convenio del Ayuntamiento, con todas sus consecuencias y dar «una oportunidad a la municipalización».





La ampliación del centro comercial lleva aparejada una inversión de 115 millones de euros. ANTONIAGA

## La Consejería de Medio Ambiente aprueba la ampliación de Plaza Mayor

► El informe realizado por la Junta plantea una serie de correcciones para salvar las limitaciones del Plan de Inundabilidad del Guadalhorce

MIGUEL FERRARY MÁLAGA

La ampliación del centro comercial Plaza Mayor ha obtenido el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de forma que se

desbloquee esta inversión para su aprobación inicial en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, según informó ayer la Administración autonómica.

El informe de la Consejería de

Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, señala que este proyecto es compatible con el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones, siempre que se incorporen

las correcciones constructivas que pallen los riegos.

La ampliación de este centro comercial va aparejada a una inversión de 115 millones de euros, con la previsión de crear 300 nuevos puestos de trabajo, lo que le convierte en uno de los proyectos más importantes de la provincia en los últimos años. Ocupará 17.000 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) e incluirá 90 tiendas, fundamentalmente del ámbito de la moda, y se procederá a una segunda fase que abrirá en 2019 con 13.000 metros.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio considera viable la ampliación del Plaza Mayor con las soluciones provisionales propuestas para salvar la afección de la zona inunda-

**Obra de interés general**  
La Junta de Andalucía insta al Gobierno central a que concrete el presupuesto de encauzamiento del Guadalhorce

ble en Málaga y mientras se sustituye el puente de la antigua N-340 sobre el Guadalhorce por otro con mayor capacidad y se elimine el antiguo puente del ferrocarril, que disminuye la capacidad de evacuación del cauce.

Tras esta aprobación, la Junta reiteró ayer que tanto el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Demarcación de las Cuenas Mediterráneas Andaluzas como el Estudio de Inundabilidad del Guadalhorce no supondrán un freno para los proyectos urbanísticos en desarrollo en Málaga, Alhaurín de la Torre con su ciudad aeroportuaria o Cártama, entre otros.

**Ampliación pendiente**

La construcción del nuevo puente de la N-340 y eliminar el puente ferroviario están consideradas como obras de Interés General del Estado, por lo que la Junta insta al Gobierno central a que concrete el presupuesto de encauzamiento del Guadalhorce y la eliminación de los obstáculos para la evacuación del río Guadalhorce.

## Málaga plantea un plan estratégico a cuatro años para mejorar el destino

► El documento, que estará vigente hasta 2020, fue presentado ayer al Foro de Turismo de la ciudad

LA OPINIÓN MÁLAGA

Málaga se ha propuesto seguir avanzando en la construcción de la ciudad como uno de los destinos más dinámicos de España sin dejar de ser sostenible y para ello, la ciudad pretende seguir trabajando en sus fortalezas y buscar nuevos modelos que permitan encontrar soluciones creativas y concertadas a las cuestiones de carácter social, económico, físico y ambiental que puedan afectar al sector turístico.

Esos son los grandes objetivos del plan estratégico 2016-2020 que fue sometido ayer a la consideración del Foro de Turismo de Málaga y que será presentado en las próximas semanas. Es la primera vez que el Área de Turismo trabajará con un plan estratégico

a cuatro años, ya que hasta ahora venía funcionando con planes directores anuales, según anunció el alcalde, Francisco de la Torre, durante la reunión extraordinaria convocada para celebrar el noveno aniversario del Foro de Turismo de Málaga Ciudad, unos años en los que este órgano se ha convertido en el escenario para el intercambio de ideas, análisis conjunto de la situación del turismo de nuestro destino y la toma de decisiones.

En este órgano se han desarrollado una serie de acciones que han ido mejorando el posicionamiento de Málaga como un destino competitivo, ayudando a la industria turística de la ciudad a consolidarse como una de las principales fuentes generadoras de empleo, riqueza y bienestar, informó ayer el Consistorio.

Por ello, el Foro de Turismo instó ayer al Ayuntamiento a seguir trabajando por la consolidación de los segmentos turísticos tradicionales en los que has-

ta ahora se ha asentado la fortaleza del destino -turismo cultural y de grandes eventos, turismo de congresos e incentivos, turismo de cruceros y turismo idiomático- sin dejar de lado la apuesta por nuevos segmentos que completen la oferta actualmente existente -naturaleza, compras, gastronomía y turismo náutico-.

El Ayuntamiento resaltó que con la labor desarrollada en estos años por el Foro de Turismo la ciudad de Málaga ha tenido una marcada evolución en el panorama de los destinos turísticos europeos, que se ha traducido en un aumento de la planta hotelera, el incremento en la oferta de museos y atractivos culturales, la mejora de la oferta gastronómica, la creación de equipamientos para congresos y reuniones y un ambicioso plan de peatonalización del Centro Histórico, entre otros elementos, y se ha logrado duplicar el número de turistas que visitan la ciudad.

## La Junta recuerda que el metro es una de las obras más fiscalizadas

► La Administración autonómica responde a la petición municipal de hacer una auditoría

M. FERRARY MÁLAGA

El claro enfrentamiento del Ayuntamiento de Málaga con la Consejería de Fomento para oponerse a la terminación del metro de Málaga y su sustitución por un carril bus sigue escalando en virulencia. La propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, de auditar la obra del metro ha sido interpretada como un ataque frontal, lo que le ha valido una contundente respuesta de la Consejería que recuerda que es uno de los proyectos de infraestructuras más fiscalizados.

El gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), Francisco Pérez, afirmó ayer que «la petición

del alcalde de efectuar una auditoría de la gestión del metro de Málaga constituye un nuevo elemento de confrontación y dilación sin fundamentos», poniendo de relieve que la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) están fiscalizando estas obras desde el principio. «El alcalde se inventa una nueva reclamación, obviando que el metro de Málaga ha tenido una fiscalización permanente desde su origen», señaló el responsable de la AOPJA y aseguró que esta propuesta «no puede ser interpretada más allá de los artificios recurrentes de De La Torre, a los que se agarra cuando no encuentra argumentos sólidos».

En el curso de esos años, además, organismos como el Consejo Consultivo de Andalucía o la Cámara de Cuentas de Andalucía han examinado y analizado de manera minuciosa sus diferentes parámetros y modificaciones.

## ECONOMÍA

# La caída de ingresos eleva el déficit del Estado hasta el 2,08% del PIB

● En sólo cinco meses supera en casi tres décimas el objetivo anual de 2016, cifrado en un 1,8%

## Agencias MAORIT

La caída de los ingresos procedentes del IRPF y del Impuesto de Sociedades ha propiciado un aumento anual del déficit estatal hasta mayo del 5,5 %, hasta alcanzar 23.301 millones de euros, equivalentes al 2,08 % del PIB, con lo que se sitúa por encima del objetivo para el conjunto del año (1,8 %).

El déficit público consolidado del Estado, las comunidades autónomas y la Seguridad Social se situó en el 1,23% del PIB en abril, aún lejos del 3,6% previsto para todo el año, según datos del Ministerio de Hacienda.

En el periodo entre enero y mayo, el déficit público del Estado se ha situado en 23.301 millones de euros, un 2,08% del PIB, ligeramente superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, que fue del 2,04%.

Los ingresos no financieros, una vez descontadas las transferencias a las administraciones territoriales, ascendieron hasta mayo a 47.283 millones, un 18% menos. Según admite Hacienda, "una parte importante de esta caída se debe a efecto de la reforma fiscal iniciada en 2015, cuyos efectos continúan en este ejercicio, y que afectan sobre todo a las retenciones".

Esta caída va aparejada a una disminución de los ingresos impositivos totales del 7,8%, entre los que destaca el descenso del 9,8% del IRPF. La recaudación por Sociedades ha disminuido en 537 millones, como consecuencia de la



El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el pasado jueves, en Madrid.

caída de los ingresos del primer pago fraccionado en un 48,7%.

Por el contrario, los ingresos por impuestos indirectos se han incrementado un 3%, impulsados por el aumento de la recaudación por IVA del 2,1% y el 6% por impuestos especiales.

Por su parte, los ingresos no impositivos se han reducido un 40%. En este capítulo, los ingresos patrimoniales caen un 73,3%, debido a que el año 2015 recogía la venta de acciones de Aena y los intereses de los préstamos concedidos a comunidades autónomas y ayuntamientos a través del Fondo de Financiación.

Por otro lado, el total de gastos no financieros cayó hasta mayo un 7,5%, hasta los 61.621 millones, el equivalente a 61.621 millones de euros. Destaca la reducción de las

transferencias a los Servicios Públicos de Empleo, que pasaron de 3.201 millones hasta mayo de 2015 a los 360 millones, por la menor dotación y menor ritmo de ejecución presupuestaria gracias a la mejora del mercado laboral.

Además, el pago por intereses ha ascendido a 14.993 millones de euros, con una reducción del 0,3% respecto a igual periodo del año anterior.

Hacienda destaca que si de la cifra de déficit de caja del Estado se descuenta el efecto de los intereses, se produciría un superávit primario de 605 millones, un 90% inferior al registrado en el mismo periodo del año anterior y de medio punto inferior en términos de PIB, hasta el 0,05%.

También se ha reducido la aportación al Presupuesto General de

la UE en un 18,1%, y que se contabiliza en este periodo la devolución del 50% de la paga extra a los funcionarios.

El Estado registró un déficit de 12.878 millones a finales de abril, un 1,15% del PIB, resultante de un déficit de la administración central del 1,25% y una superávit de sus organismos del 26,4% del PIB.

Por su parte, las comunidades autónomas registraron un déficit de 2.624 millones hasta abril, el 0,23% del PIB, por debajo del 0,34% del año anterior. El objetivo para todo el año es el 0,7%. La cifra se ha reducido hasta ese mes un 29,5%, hasta los 2.624 millones, según la información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por comunidades autónomas, sólo el País Vasco arroja un saldo

positivo (+0,32% del PIB), mientras que La Rioja se queda a cero, Asturias en el 0,03% y Navarra registra un déficit del 0,07%. En el otro extremo, Extremadura registra una necesidad de financiación del 0,93% del PIB, el mayor de todas las regiones, por encima del que tuvo en abril de 2015 y la única por encima del objetivo previsto para todo el año 2016. Le siguen, a distancia, Andalucía (0,39%), Comunidad Valenciana (0,32%) y Cantabria (0,32%). Madrid y Castilla-La Mancha se sitúan en el 0,28%, Aragón en el 0,26%, Castilla y León y Cataluña en el 0,24% del PIB, y Murcia, en

El sistema de la Seguridad Social registra un superávit de 1.044 millones

el 0,23%. Por debajo quedan Galicia (0,16%), Baleares (0,15%) y Canarias (0,13%).

La Seguridad Social registró un déficit equivalente al 0,15% del PIB en los primeros cuatro meses del año, hasta los 1.642 millones. Tras estas cifras se encuentra un crecimiento del 3,7% en los ingresos por cotizaciones sociales, superior al 0,4% registrado un año antes.

Más en detalle, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registró un superávit de 715 millones de euros, el equivalente al 0,06% del PIB, frente al 0,16% del mismo periodo del año anterior. Esto se debe a las menores transferencias recibidas por parte del Estado para financiar el desempleo. Por su parte, el sistema de la Seguridad Social registró un superávit de 1.044 millones, el 0,09% del PIB frente al 0,14% de abril de 2015, mientras que el Fondo de Garantía Salarial registró un déficit de 117 millones, frente a los 52 millones computados hace un año.

## Banco de España: el crecimiento de abril a junio llega al 0,7%

### Agencias MAORIT

La economía española avanzó un 0,7% del PIB entre abril y junio en comparación con el primer trimestre, lo que supone una ligera ralentización de una décima respecto al periodo enero-marzo de este mismo año que, no obstante, demuestra la continuación de un "crecimiento robusto de la actividad", según el Banco de España.

El Boletín Económico de junio, publicado ayer, asegura que "la in-

formación disponible confirma la continuación de la fase expansiva de la actividad en la etapa más reciente". La evolución favorable del mercado de trabajo y la mejora de las condiciones financieras estarían sustentando la expansión del consumo de los hogares, a un ritmo muy similar al de los trimestres anteriores, en tanto que la inversión empresarial habría experimentado una cierta ralentización, conservando, no obstante, su pauta expansiva.

Sin embargo, el Banco de España alerta de que el ritmo "moderado" de avance de la actividad global se vio "truncado" a comienzos de junio por la influencia de algunos factores de carácter político, principalmente el mantenimiento de una "elevada incertidumbre" por la salida del Reino Unido de la UE, que ha generado una "intensa reacción" inicial en los mercados financieros, "siendo muy difícil de pronosticar la intensidad o duración de esta reacción".

"Resulta muy prematuro discernir qué parte de esta reacción inicial de los mercados financieros refleja el impacto que pueda comportar a medio y largo plazo el resultado del referéndum británico", subraya el Banco de España. En el Boletín, insiste en que el resultado favorable a la salida ha generado una "intensa reacción" en los mercados financieros internacionales, ánte la "elevada incertidumbre" sobre las implicaciones de este resultado para la economía

global, siendo "muy difícil" pronosticar la intensidad o duración de esta reacción.

En el caso concreto de España, indica que en junio repuntaron las "volatilidades", principalmente por la incertidumbre generada en torno a la decisión que los británicos tomarían sobre la salida de Reino Unido de la UE y, una vez conocidos los resultados de la consulta, se registraron caídas en las cotizaciones bursátiles y repuntes de la prima de riesgo.

## Opinión

## ‘BREXIT’: LOS PELIGROS COMIENZAN AHORA



Juan Ramón Rallo

Director del Instituto Juan de Mariana y profesor del Centro de Estudios OMMIA

A pesar de la rotunda reacción inicial de los mercados financieros durante la jornada del pasado viernes, lo cierto es que el *Brexit* no ha caudado de momento ni un ápice el marco institucional entre Reino Unido y la Unión Europea. Más bien, el *Brexit* es un mandato de la mayoría de votantes británicos al Gobierno británico para que, a lo largo de los próximos años, negocie el abandono de las instituciones políticas comunitarias. Por consiguiente, lo que cotiza negativamente en los mercados financieros no es, por ahora, la quiebra de la cooperación económica social entre británicos y europeos, sino el riesgo de que esta ruptura se termine materializando.

En efecto, la Unión Europea sufre muchísimos defectos –burocratización, falta de transparencia, déficit democrático, cartelización de intervenciones estatales, elevado coste de funcionamiento– que han pesado decisivamente entre muchos británicos a la hora de apoyar el *Brexit*. Ahora bien, la UE también está asociada a varias virtudes fundamentales que no deberían perderse: en particular, la libertad de movimientos de personas, capitales, mercancías y servicios. Desde un punto de vista estrictamente econó-

mico, el libre comercio y la libre circulación de personas contribuyen a impulsar el crecimiento y el desarrollo mercantil de nuestras sociedades: un mercado más amplio –con menores barreras y cortapisas estatales– es un mercado que ofrece mayores oportunidades para asignar de un modo más eficiente todos los factores productivos. Por eso, la globalización –a mundialización de la economía– es beneficiosa: porque aumenta la productividad del conjunto de la economía y, por tanto, nuestro bienestar.

Ahora bien, el libre comercio también es beneficioso desde un punto de vista social. Los europeos estuvimos siglos guerreando entre nosotros hasta que, entre otras mutaciones, empezamos a comerciar, invertir y desplazarnos sin fronteras internas. El libre comercio fomenta la cooperación y permite el entendimiento mutuo; el nacionalismo excluyente y proteccionista, en cambio, los destruye, incentivando así el enfrentamiento fratricida. Por eso, debería constituir una absoluta prioridad la salvaguarda de aquella libertad que hizo prosperar y que contribuyó a pacificar a Europa.

¿Cómo lograr preservar esta libertad tras el *Brexit*? Pues, en realidad, no hay ninguna incompatibilidad entre abandonar la Unión Europea (*Brexit*) y mantener entre Reino

Unido y el Continente las libertades básicas que hoy caracterizan a la Unión Europea. A la postre, la Unión Europea es un proyecto de centralización política del que, con enorme sentido común, muchos británicos desean salirse.

Pero escapar de la progresiva creación de un mega-Estado europeo no equivale necesariamente a censurar la libertad intracorporal de movimientos de personas, capitales, mercancías y servicios: estos cuatro pilares fundamentales pueden preservarse a través de la suscripción de tratados bilaterales entre Gran Bretaña y la Unión Europea. La propia Suiza estructura su marco de convivencia con el resto de Europa de esta manera, y aunque un caleo del modelo suizo tal vez no sea exportable a Reino Unido, sí nos sirve para ilustrar la existencia de formas institucionales alternativas a la centralización estatal de la UE.

Desde luego, el camino para suscribir tratados liberalizadores entre Gran Bretaña y la UE no está ni mucho menos despejado. Por un lado, la eurocracia bruxelense posee incentivos más que obvios para penalizar el *Brexit*: si los ciudadanos europeos descubren que podemos mantener lo mejor de la UE (sus libertades fundacionales) sin cargar con lo peor de la UE (sus regulaciones y burocracia), entonces otros países podrían decidir seguir por el mismo camino cerrándoseles el chiringuito. Por otro, el *Brexit* está compuesto por una coalición muy heterogénea de ciudadanos opuestos a la UE: desde re-

caltrantes xenófobos y mercantilistas que aspiran a cerrar las fronteras hasta liberales clásicos que tan sólo pretenden huir del yugo de la UE abriéndose hacia el exterior; de modo que no está claro que la mayoría de partidarios del *Brexit* estén dispuestos a mantener esas libertades (sobre todo la migratoria).

Para una óptima resolución del proceso de abandono de la UE por parte del Reino Unido, será esencial tanto que los europeos frenemos el sadismo revanchista de los eurocratas cuanto que el bando sensato y liberal del *Brexit* se coaligue con los partidarios del *Romain* para mantener la libertad comercial y migratoria entre ambas sociedades. De momento, en ninguna parte está escrito que el *Brexit* esté abocado a naufragar en un movimiento desgloboizador: los peligrosos liberticidas no vienen de abandonar la UE, sino de abandonarla para encerrarse frente al exterior. Si logramos evitar ese gran riesgo, entonces el *Brexit* no sólo no será negativo, sino que podría terminar siendo muy positivo para todos. No será una tarea sencilla pero, si finalmente resulta exitosa, acaso otros tendríamos que plantearnos continuar por esa misma senda: menos Unión Europea y más libertad entre asociaciones políticas descentralizadas y autónomas.

La salvaguarda de la libertad de comercio debería ser una absoluta prioridad en Europa

## FALSAS DISPUTAS SOBRE EL MERCADO LABORAL



Fernando Méndez Ibasate

Universidad Complutense de Madrid

No hay alternativas a las reformas planteadas a nuestro mercado laboral por los economistas especialistas en la materia, entre ellos el Banco de España, por mucho que se las presente o se las tache de impertinentes, interesadas o incluso crueles.

Bueno, sí. Existe alternativa y es la en verdad cruda, fría, malvada e interesada situación de mantener, como llevamos haciendo, durante 38 años (1979 a 2016) las condiciones de un mercado laboral que, en sus mejores datos (EPA), ampara unos dos millones de parados, llegando a alcanzar los seis millones; cuyas tasas mínimas de desempleo están en torno al 8 por ciento de la población activa –cuando se llegaba a récords de 20,7 millones de ocupados– y han superado el 26 por ciento (primer trimestre de 2013); o con tasas de actividad agregadas que logran máximos del 60 por ciento en 2012 y rondan niveles superiores gracias a la aportación de los trabajadores extranjeros (inmigración) a la actividad. Es decir, en el mejor de los casos, un 40 por ciento de la población española se muestra no dispuesta a trabajar.

Y todo ello con continuas disfunciones, entre las que destaca un comportamiento muy

desigual o asimétrico del mercado para destruir o para crear empleo, conocido como histeresis, y que sólo en ciertos periodos –entre 1998 y 2003–, tras reformas concretas, se logra sortear; también con dualidades de todo tipo (por edades, por sexo, los que están –insiders– o los que buscan –outsiders–, por temporalidad o por tipos de contratos...); con cifras comparadas que indican los muchos desincentivos o barreras de entrada que nuestra regulación, trabas, exigencias, indemnizaciones, costes..., de todo tipo, levantan para dificultar la contratación, incorporación y permanencia de las personas en el mercado laboral.

No se trata de “costes de despido”, como interesadamente y con éxito se los denomina, sino de costes de contratación e incorporación laboral. Entre los que deben considerarse, también, las barreras, carencias y tópicos que un mal entendido y aplicado sistema de formación (la educación viene de casa o difícilmente viene y el Estado, la Administración, no debe “educar” a las personas), dominante entre mediados de los ochenta y hasta la reciente aplicación de la Lomce (curso 2014), ha ido introduciendo sobre bases ideológicas concretas que se han mostrado retrógradas y perjudiciales en varios aspectos.

La reforma de Fátima Báñez ha contribuido a la modernización del mercado de trabajo

Desde luego, en esos 38 años hemos progresado y ampliado en las mejoras de las condiciones laborales y formativas; no cabe duda. Pero con los niveles o resultados alcanzados, las condiciones o cifras que han caracterizado nuestro mercado laboral y con el panorama de rigideces y dificultades a los que se enfrenta el empleo en España, no puede dejar de cuestionarse hasta qué punto muchos de esos logros y virtudes obtenidos no hubiesen tenido igualmente lugar con el propio crecimiento económico, incluso más si nuestra legislación, normativa y reglamentación hubiesen acompañado mejor, con menos intervencionismo o atención a los intereses de grupos de poder y más confianza en la libertad de contratos y acuerdos. Y es que el paro no se reduce, ni el empleo se crea, mediante intervención pública o pérdida de libertad, aunque los sistemas autoritarios presenten tasas de paro casi nulas.

Pese a sus carencias y falta de ambición, e incluso con las trabas o frenos que los tribunales han puesto en temas diversos como descuelgues, aplicaciones de convenio o ultractividad, la reforma laboral de 2012 ha contribuido de forma clave a la modernización de las relaciones laborales al priorizar

los acuerdos o convenios de empresa por encima de cualquier otro. Tal marco normativo procura reforzar la flexibilidad de las empresas (no tanto de empresarios o trabajadores, sino de esas instituciones), permitiéndolas ajustar sus relaciones laborales a su realidad y particulares condiciones dentro de su sector o mercado. Y no puede aducirse en nuestras actuales condiciones y en el siglo XXI, salvo que se tonie a las personas por inútiles y las instituciones por incompetentes, que sin convenios colectivos y sectoriales el trabajador queda desasistido.

El Informe Anual del Baneo de España, cuyas consideraciones y recomendaciones no son insólitas, extiende el problema de la formación al empresariado: los cuadros técnicos, directivos, gestores, etc. son muy competentes cuando de empresas grandes o que se la juegan operando fuera se trata; pero en el caso de pequeñas empresas, y por elar razones de costes, la mentalidad más tradicional, incluso tosca, que contempla la empresa como un dominio y las relaciones laborales como de suma cero o negativa, aparece más a menudo. Y no olvidemos que nuestra estructura empresarial está formada en un 99,3 por ciento de pymes (menos de 50 asalariados); el 83,1 por ciento tiene dos o menos empleados. Y, lo que es peor, los costes de asesoría y consultoría profesional siguen siendo muy elevados ante la falta de competencia y la transposición real de directivas europeas.